

Auto: 030 de 2023
Demandante: Rocío López de Montoya
Demandada: Oscar Montoya López y otros
Radicado: 05001 31 03 017 2011 00505 01
Asunto: Niega solicitud de aclaración y complementación de la sentencia

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

1. Asunto a resolver. La apoderada de las codemandadas Nataly y Estefanía Montoya Duque, solicita complementación de la sentencia argumentando que en ella se condenó en costas de ambas instancias a la parte demandada sin tener en cuenta que aquellas: *“...fueron vinculadas al proceso por decisión judicial y en representación de su fallecido padre el señor Gabriel Ignacio Montoya López, quienes son herederas de la fallecida señora Rocío López, en representación de su padre quienes por demás no ostentan la calidad de dueñas del inmueble objeto del proceso, en sentir de la suscrita existe una confusión, como se excepcionó en la contestación de la demanda, pues los demandantes son los mismos demandados, al fallecer la señora Rocío López de Montoya, los sucesores de la demandante son sus hijos que a su vez se convierten en demandantes a quienes ella demandó, siendo entonces estos los demandados y ocurriendo el fenómeno de la confusión, pues las partes son demandas (sic) y demandantes a la vez...”*

Pide, entonces, que: *“...como consecuencia de lo anterior se solicita claridad, corrección o modificación del numeral 4 de dicho fallo...”*

I. CONSIDERACIONES

1. De la solicitud de complementación de la sentencia. Como es suficientemente conocido, tanto el legislador como la jurisprudencia, han diseñado los siguientes mecanismos para que el juez corrija los errores observados al interior de sus providencias: la aclaración (art. 285 CGP), corrección (art. 286 *ibí.*) y la adición y/o complementación de las providencias (art. 287 *ejusdem*).

Si bien existe un principio de inmodificabilidad de las providencias en firme, igualmente existe el deber de corregir los errores que contiene la misma. La coexistencia de estos principios, entonces, está determinada por lo que es susceptible de corrección: **las frases o conceptos que ofrezcan**

verdadero motivo de duda, siempre que influyan en la parte resolutive o, **cuando se omitió resolver un punto que debió ser objeto de pronunciamiento**.

2. En este caso, se observa que no le asiste razón a la peticionaria para pedir la aclaración o adición de la sentencia proferida por esta Corporación el pasado 06 de febrero de los corrientes, cuando solicita que se corrija la condena en costas, según su dicho, porque desde su particular manera de entender el asunto se ha presentado una confusión, como que se condenó a las mismas partes entre sí, debido a que existe una coincidencia en ambos extremos litigiosos.

Se olvida la apoderada quien pide aclarar la sentencia, que en realidad la confusión que se presenta resulta aparente y no real, puesto que una cosa es la actuación que hacen sus representadas dentro del proceso como demandados, en representación de su señor padre fallecido y otra bien distinta es la que hacen como sucesoras procesales en el pleito que a sus hijos les planteó la señora Rocío López de Montoya (madre de Gabriel Ignacio Montoya López y abuela de Nataly y Estefanía Montoya Duque), sin que sea cierta que se presente en este caso la figura de la “confusión” que dicen se presentó, pues, la sentencia fue muy clara en condenar en costas de primera y segunda instancia solamente a la parte vencida en juicio, razón potísima y suficiente para que no haya nada que complementar o corregir o adicionar.

Muy diferente el patrimonio de la demandante ya fallecida que ha pasado a ser un patrimonio autónomo como lo es la herencia y otra bien distinta es el también patrimonio autónomo del señor Gabriel Ignacio Montoya también fallecido, pero que fue demandado por su señora madre y al resultar prósperas las pretensiones de la demanda es por lo que se imponía la condena en costas como se hizo, sin que haya lugar a explicar nada oscuro de la sentencia en ese sentido.

Conforme el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, puede apreciarse claramente que el legislador tomó partido **por un criterio objetivo para la imposición** de costas a la parte vencida en el proceso, con total independencia de su conducta procesal. Se observa, entonces, que las integradas por pasiva, en calidad de herederas determinadas del señor

Gabriel Ignacio Montoya López, llegaron al proceso oponiéndose a las pretensiones de la demanda, dijeron que era cierto que el 20% del derecho de la nuda propiedad de los inmuebles relacionados fue adquirido por su señora madre María Margarita Duque Gómez, mediante proceso de sucesión del fallecido padre de estas, según constaba en la Escritura 1344 de la Notaría 21 de la ciudad de Medellín, de fecha junio 30 de 2004, registrada en la anotación número 14 de los folios inmobiliarios **001-689703, 001 - 689777 y, 001 – 689791**, cuya cancelación se ordenó en la sentencia, por virtud de la prosperidad de la pretensión simulatoria en su vertiente absoluta, luego, procedía la respectiva imposición de costas, en virtud a que aparecían comprobadas y ello, ni por asomo, constituye motivo de duda u oscuridad en la resolutive.

2.1. Pero, a la postre, lo que incomoda a la togada memorialista, es el hecho que, en su sentir, se genera una contradicción al condenárseles en costas, siendo que las mismas partes del proceso ocupan la parte activa y la parte pasiva, no obstante, el punto abarca temas que ya fueron ampliamente discutidos, como que **la causante continúa siendo la parte demandante**, solo que los herederos asumen su representación mientras la sucesión esté ilíquida, porque como lo explica el maestro Hernando Devis Echandía: *“Esas modificaciones en la estructura de las partes en el proceso, no alteran la relación jurídico-procesal en cuanto al contenido de la litiscontestatio, y sus defectos o los resultados de la sentencia, que permanecen inalterables. La sucesión o el incremento en cuanto a los sujetos o personas que constituyen las partes, tiene un sentido formal, pues se considera que el debate sigue siendo entre los mismos demandantes y demandados y respecto a la relación sustancial planteada, a pesar de que otras personas físicas o jurídicas asuman esa condición en su lugar (...) El proceso continúa siendo el mismo, y la sentencia debe recaer sobre las relaciones sustanciales que las partes originalmente plantearon”¹*

Por consiguiente, quedando incólume **el interés que movió** a la fallecida **-luego de iniciado el proceso-** Rocío López de Montoya, para pedir declaratoria de simulación absoluta respecto de la supuesta compraventa que realizó con su hijo y aún las compraventas que sobre el mismo objeto realizaron ellos en forma simulada, con el fin de que el bien inmueble objeto del litigio, retorne a la **sucesión**, para que, de ser el caso, se inventarié, divida y adjudique a quien corresponda, evitando que se haga un esguince a los cauces jurídicos

¹ Devis Echandía, Hernando, *“Nociones Generales de Derecho Procesal Civil”*, Segunda Edición, Editorial Temis S.A., 2009, págs. 436-438

de la sucesión y que: “...el **negocio nulo** o **fraudulento pueda producir efectos**, o que **alguno de los contratantes pueda sacar provecho de él...**”² argumentos que quedaron vertidos en el respectivo acápite motivacional de la sentencia (cfr. fl. 8-10) y que, incluso, provocaron el salvamento de voto por parte de la Magistrada integrante de la Sala de Decisión.

3. Bajo este entendido, lo solicitado por la togada escapa de la órbita funcional de esta Sala de Decisión que ya estudió el caso. Recuérdese que, la vía de adición o aclaración del fallo no es la idónea para pedirle al Juez modificar los argumentos dados para resolver el caso y, mucho menos, buscar que se realice un estudio diferente, **pero en el sentido o bajo los argumentos que pretende, en este caso, so capa de la condena en costas**, pues, atendiendo al principio de seguridad jurídica, a quien juzga le está vedada la posibilidad de reformar o revocar su decisión.

3.1. Al respecto, en reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha dicho:

“...se mantiene incólume la prohibición a quien juzga, de pronunciarse nuevamente sobre la sentencia ya proferida, por cuanto, (...) ella es Intangible para la autoridad judicial que la hubiere dictado, a quien le está vedado revocarla o reformarla so pretexto de aclararla. Se considera pues que una decisión encaminada exclusivamente a precisar el contenido de una decisión judicial es innecesaria, cuando esta es clara, al punto de correr el riesgo de modificar sus alcances, alterar su contenido, reducir su espectro de acción o modificar las condiciones en que se concedió el amparo de tutela, lo cual implica la producción de una nueva providencia judicial y la consecuente afectación de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica (A-194A de 2008).”

4. Corolario de lo anterior y, como quiera que no hay lugar a la adición y/o aclaración que se depreca, se negará tal petición.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

² Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 10 de septiembre de 2001, dentro del expediente radicado No. 5961, con Ponencia del H. Magistrado Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles.

II. RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR** la petición de **ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE SENTENCIA** que eleva la apoderada de la parte codemandada, de conformidad con lo expuesto en el aparte considerativo de esta providencia.

SEGUNDO: Cumplida la ritualidad secretarial, remítase el expediente al Juzgado de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, DEVUÉLVASE Y CÚMPLASE,



JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado



Con salvamento de voto
PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
Magistrada



JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado